

Rabiosa ofensiva

Araceli Damián*

No puede denominarse de otra forma, el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) representa una rabiosa y enfermiza ofensiva al sindicalismo independiente mexicano y a los pobladores del DF que han mostrado sus preferencias por los gobiernos de izquierda.

Debemos aclarar que aunque el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) puede tener vicios muy serios, no le rendía pleitesías al poder federal y, en cambio, mantuvo una alianza con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, líder con un respaldo popular muy elevado y que es odiado por las elites empresariales y de la “izquierda”, y por la derecha en general.

Además, el SME se aventuró a solicitar la concesión de la fibra óptica instalada por los trabajadores en la red de cableado eléctrico, lo que le permitiría ofrecer servicios de “triple play” (televisión, telefonía e internet) a precios más bajos de los que ahora se ofrecen. Los industriales del ramo no están dispuestos a compartir este negocio, menos con un sindicato, se entiendo ahora por qué brindaron un gran aplauso a Calderón un día después del atropello.

En múltiples comentarios y artículos en los medios de comunicación sobre la agresiva liquidación de LyFC se compara al SME injustificadamente con sindicatos verdaderamente mafiosos, como el magisterial (SNTE) y el petrolero. Las diferencias son abismales, baste mencionar que el SME es de los pocos sindicatos en este país en los que la elección de dirigentes se hace en urna, de manera secreta. Por eso, al gobierno federal le falló su intentona de imponer a un líder charro que avalara el desmantelamiento y venta de la empresa.

El PRI y el PAN, principales beneficiarios del charrismo sindical fomentado por el Estado, han bloqueado sistemáticamente las iniciativas reforma a la Ley Federal del Trabajo que obligarían a que en los sindicatos la elección de dirigentes se realizara en urnas, de manera secreta. El contubernio de los gobiernos federales de extracción panista con el SNTE es vergonzoso. Elba Esther Gordillo y sus esbirros se ven beneficiados con millonarias aportaciones de dinero público y privilegios de todo tipo a cambio de votos y la operación de mapachismo electoral.

Es tal la simbiosis, que Reyes Tamés, el ex secretario de Educación de Fox es ahora diputado plurinominal por el partido de Elba Esther, el PANAL.

Por otra parte, el ahora senador priísta, Francisco Labastida Ochoa, declaró que la desaparición de LyFC era una medida necesaria, olvidándose mencionar que él fue beneficiado con millonarios recursos para su campaña presidencial provenientes del sindicato de PEMEX. A cambio, los priístas protegieron al líder charro asegurándole puestos, primero de senador y luego de diputado, así como deteniendo la solicitud de desafuero en su contra, a fin de asegurarle inmunidad y, por tanto, la impunidad total.

El gobierno federal ha justificado su proceder insistiendo que el SME es el responsable del mal funcionamiento de la empresa, además de que sus trabajadores reciben prestaciones y salarios exorbitantes. En primer lugar, sorprende que en los medios no haya aparecido el Director de LyFC, empleado de Calderón, encargado de supervisar el funcionamiento de la empresa. ¿Acaso sus directivos no tienen responsabilidad de las fallas? Además, hay que considerar que el gobierno federal ha dejado intencionalmente de invertir en la empresa para justificar la necesidad de privatizarla.

Por otra parte, el argumento de que los trabajadores ganan en exceso ha quedado descalificado al filtrarse que más de 20 mil trabajadores del SME ganaban menos de seis mil pesos al mes y que sus prestaciones son similares a las que reciben los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (véase el Universal, 14/Octubre/2009).

Por otra parte, la marcha del jueves pasado dejó claro que los trabajadores del SME son y pertenecen a la clase social trabajadora, visten y calzan como la mayor parte de los humildes trabajadores mexicanos, no se observaron carriolas de súper lujo, ni bolsos y zapatos de marca, como suelen verse a los funcionarios públicos, líderes charros y sus esposas. Si bien Esparza, como la mayoría de los líderes sindicales incurre en excesos, los trabajadores del SME no ganan millonarios salarios como sí sucede con los funcionarios públicos que decidieron la desaparición de LyFC y que, por tanto, carecen de autoridad moral para descalificar las prestaciones logradas por un sindicato con 95 años de antigüedad.

Nada permite suponer que los trabajadores del SME son privilegiados. Es por tanto lamentable que el gobierno federal utilice una propaganda mediática que fomenta el odio de los trabajadores sin derechos laborales hacia los que los tienen. Son un grupo “privilegiado”, vociferan sin cesar. Pero sus alaridos ocultan la triste realidad en la que empresarios y gobiernos mantienen a los trabajadores de México. Según la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre de 2009, 60% de trabajadores subordinados (con o sin pago) carecen de un contrato de trabajo (ya sea temporal o permanente). Este porcentaje se reduce a 39% en el DF, que se ha convertido en la entidad federativa más odiada del gobierno federal, por su vocación democrática.

El golpe al SME es emblemático si nos atenemos a la enfermiza lucha del gobierno federal contra la Ciudad de México y sus trabajadores que han demostrado sus preferencias antipriístas y antipanistas. En plena crisis despedir a más de 40 mil trabajadores que viven en buena proporción en nuestra entidad, es un claro ejemplo de lo que el gobierno federal está dispuesto a hacer para desestabilizar la paz social de los capitalinos. Tenemos que ser ante todo solidarios con este movimiento de resistencia ante un golpe más a nuestras libertades.

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx